

**Recurso nº 304/2021**

**Acuerdo de 8 de julio de 2021 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas cautelares, en relación con el expediente de contratación “Suministro de mascarillas de protección respiratorias (FFP2 y FFP3), y mascarillas quirúrgicas (IIR), para el Hospital Clínico San Carlos, número de expediente: PA 2020-0-332”, lote 4.**

Con fecha 4 de julio de 2021 se ha recibido el recurso especial en materia de contratación suscrito por Saniprotect, S.L. contra su exclusión en trámite de adjudicación del procedimiento citado.

En su recurso insta la suspensión del procedimiento, entendiendo que su habilitación para continuar en el procedimiento implicaría la adjudicación a su favor por encontrarse en primer lugar clasificado tras la exclusión de otros licitadores.

Por el órgano de contratación no se ha contestado sobre la petición de suspensión en el trámite de contestación al recurso.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de*



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055152937405056994141**

*adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”.*

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aún concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuya estimación llevaría a la misma anulación de la adjudicación.

Dado el estado de tramitación de tramitación del procedimiento sería posible llegar a la adjudicación del contrato con anterioridad a la resolución del recurso, motivo por el cual este Tribunal considera que debe garantizar que no se celebre el contrato sin que se haya decidido sobre el fondo del asunto.



El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato. Con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación se evita que con la posible formalización del contrato se puedan causar otros perjuicios a los interesados afectados y especialmente al adjudicatario, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción y se evita que se produzcan situaciones que pudieran derivar en indemnizaciones a los perjudicados.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,

### **ACUERDA**

Suspender la tramitación del procedimiento lote 4 del expediente referido hasta que por este Tribunal se resuelva acerca del recurso especial de contratación meritado.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

**EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL**

